

# LA OSCURIDAD AL FINAL DEL TÚNEL

Un balance político y de gestión sobre los primeros meses del gobierno de Javier Milei

Presentación general



 Fundación  
para el  
Desarrollo  
Humano  
Integral

@fundacion.dhi  
[www.fundaciondhi.com.ar](http://www.fundaciondhi.com.ar)

# “La oscuridad al final del túnel. Un balance político y de gestión sobre los primeros meses del gobierno de Javier Milei”

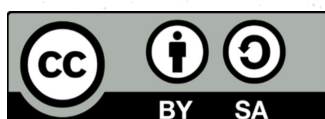
**Fundación para el Desarrollo Humano Integral**

<http://fundaciondhi.com.ar>

Publicación: agosto de 2024

**Coordinación general:** Ulises Bosia, Bruno Giormenti Moravec,  
Gimena Cánepa y Romina Chuffardi

**Diseño:** Lucas Grimson



Esta publicación y su contenido se brindan bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial 2.5 Argentina. Es posible copiar, comunicar y distribuir públicamente su contenido siempre que se cite a los autores individuales y el nombre de esta publicación, así como la institución editorial. El contenido de esta publicación no puede utilizarse con fines comerciales.



Fundación  
DHI



# Presentación general

La serie de informes que presentamos fueron elaborados por cada uno de los equipos de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral entre mayo, junio y julio de 2024. Son el resultado del seguimiento de la política del gobierno de Javier Milei, desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023. Fueron realizados con el fin de obtener una caracterización de la primera etapa del gobierno nacional, toda vez que las primeras medidas de cualquier gobierno son signos inequívocos del rumbo general que se busca adoptar. El caso del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) no es una excepción en este sentido. Más bien todo lo contrario.

Hemos titulado al conjunto de estos trabajos “La oscuridad al final del túnel: Un balance político y de gestión sobre los primeros meses del gobierno de Javier Milei”. El título es elocuente: consideramos que, pese a las promesas habituales del manual del ajuste económico, lo que viene después del intenso sufrimiento provocado por las decisiones gubernamentales no es un futuro luminoso, sino una transformación regresiva. Se trata de un intento de cambio de régimen, una especie de “reseteo” en lo económico, lo político y lo social, que pretende consolidar las estructuras de una Argentina excluyente. Un viejo anhelo de los sectores dominantes, que ahora renuevan sus esperanzas de concretarlo.

Cada uno de los informes, ordenados de acuerdo al organismo que se está analizando, se organiza en tres secciones. En primer lugar, se presenta un perfil general de los principales funcionarios al interior de cada jurisdicción y de los principales cambios en el organigrama oficial. En segundo lugar se reconstruyen las principales acciones llevadas adelante por cada ministerio o área de gobierno analizada. Y en tercer lugar, se plantea un breve análisis de cuáles fueron los rasgos principales de la ejecución presupuestaria. En esta presentación haremos unos comentarios generales acerca de los denominadores comunes que hemos encontrado en el análisis de todas las áreas de gestión.

■ ■ ■

Los fundamentos para estudiar la trayectoria de los funcionarios se encuentran en la hipótesis de que una forma de acercarse a la orientación política de la nueva gestión es mediante la reconstrucción de la trayectoria de sus principales funcionarios. Cuando una fuerza política sin antecedentes de gestión llega al gobierno de un país, resulta frecuente (y necesario) que convoque a cuadros políticos y/o técnicos provenientes de otros espacios o recorridos, para completar los principales casilleros de la administración, junto con el puñado de dirigentes





## LA OSCURIDAD AL FINAL DEL TÚNEL

directamente vinculados al presidente y su equipo. Con mayor razón esto sucede así en el caso de la presidencia de Javier Milei, cuyo partido no solamente nunca había gobernado, sino que incluso parece exagerado darle entidad de partido nacional.

Uno de los fenómenos más llamativos (y sintomáticos) del presente que vivimos es la capacidad de una fuerza política que hasta hace dos años actuaba en la marginalidad del campo de representaciones políticas, de irrumpir y ocupar la centralidad del Estado sin contar con nada parecido al *cursus honorum* tradicional. El PRO, por caso, hoy envejecido pero que en su momento fue el prototipo de un “partido nuevo”, llegó al gobierno nacional luego de haberse fundado como un partido político en la ciudad de Buenos Aires, habiéndola gobernado durante dos mandatos. Cuando Mauricio Macri ganó el ballotage de 2015, su partido contaba con legisladores y presencia en la mayor parte del territorio nacional. Había acumulado experiencia de gestión y un conjunto de cuadros técnicos que ubicó en distintas funciones en el organigrama de gobierno. Aún así, debió aliarse a estructuras políticas con mucho más desarrollo, como la UCR, para asegurar su expansión territorial. El caso de La Libertad Avanza, en cambio, contrasta de forma contundente con este antecedente. Solo es posible pensarlo como resultado de un profundo deterioro de la capacidad de representación de las dos coaliciones que se sucedieron en el gobierno nacional en los últimos veinte años.

En este sentido, al analizar la proveniencia de los principales funcionarios convocados por el presidente Milei hay varias conclusiones significativas que podemos adelantar en esta presentación general. Por un lado llama la atención la presencia de cuadros provenientes del sector privado y, en especial, de destacados grupos económicos del país. Es el caso del Grupo Techint, donde áreas sumamente relevantes quedaron bajo la égida de funcionarios con larga trayectoria en algunas de sus empresas emblemáticas: la Secretaría de Trabajo y la conducción de YPF. Lo mismo podría decirse de ex empleados de la Corporación América. La presencia de estos funcionarios, así como de otros provenientes de estudios jurídicos y contables vinculados con ellos, debe comprenderse estrechamente relacionada con una serie de elementos: la apertura inmediata de una serie de negocios directamente vinculados con la extracción y exportación de recursos naturales; la agenda de propuestas legislativas presentadas ni bien asumió el gobierno, entre las que consiguió aprobar el blanqueo de capitales, una amplia moratoria, cambios en la legislación laboral y una contrarreforma tributaria, entre otras; y una hoja de ruta que promete la disminución de impuestos, una política de agresiva desregulación, el achicamiento del Estado y la flexibilización laboral. Esta combinación de factores explica que aún sectores momentáneamente perjudicados, o como mínimo



## LA OSCURIDAD AL FINAL DEL TÚNEL

no beneficiados, sostengan un apoyo activo al presidente. Son los casos de las entidades de productores rurales o de la Unión Industrial Argentina, entre otros.

Por otro lado, un contingente muy relevante de los principales funcionarios proviene de experiencias de gestión vinculadas al PRO o a Juntos por el Cambio en general. No solamente a nivel del Estado nacional, sino también de orden provincial, tanto en CABA durante la gestión de Rodríguez Larreta como en la provincia de Buenos Aires en tiempos de Vidal, así como también a nivel municipal (por ejemplo en los municipios de La Plata o San Miguel). Estas presencias, que están muy lejos de reducirse a las órbitas de influencia de los ministerios conducidos por Patricia Bullrich y Luis Caputo, coinciden con las dificultosas idas y vueltas en las relaciones políticas entre el PRO y LLA. Por ese motivo no pueden interpretarse linealmente como muestras de apoyo del PRO a la gestión nacional, sino como una combinación de factores entre los que confluyen acercamientos individuales o presiones de grupos de interés corporativo.

Finalmente, el tercer grupo más grande de funcionarios son los que provienen de distintos sectores del peronismo. Allí se puede registrar un primer intento por parte del presidente de acordar con el peronismo cordobés a través del ex gobernador Schiaretti, que fracasó ante la caída de la primera versión de la Ley Bases. Una situación similar se produjo con el gobernador salteño Sáenz. Pero luego de ese traspié, sí pudo consolidarse la incorporación de Daniel Scioli, quien hace pocos meses había disputado la precandidatura presidencial de Unión por la Patria. Detrás de esta incorporación emblemática se produjeron otros movimientos en sentido similar: los más visibles fueron los acercamientos de los gobernadores de Tucumán y Catamarca, electos por las listas de Unión por la Patria, que se concretaron a través del apoyo legislativo a la Ley Bases y de su asistencia al Pacto de Mayo, entre otros gestos. A su vez, con otra dinámica pero quizás una mayor injerencia concreta en la gestión se produjo la continuidad de distintos funcionarios de bajo perfil provenientes del Frente Renovador liderado por Sergio Massa.

Si se analiza la presencia de estos tres grupos de trayectorias podemos sustentar la hipótesis de que el presidente busca redefinir las fronteras vigentes en el sistema político, a través de un doble movimiento. Por un lado, la fagocitación de Juntos por el Cambio, mediante la disputa de su electorado y la cooptación de dirigentes dispuestos a abandonar sus lealtades anteriores. Este movimiento es el mismo que puede observarse en otras latitudes ante el surgimiento de nuevas fuerzas de la derecha, como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil o Donald



## LA OSCURIDAD AL FINAL DEL TÚNEL

Trump en Estados Unidos. Por otro lado, mediante la incorporación de sectores del peronismo dispuestos a dejar atrás una larga hegemonía de las posiciones nacional-populares defendidas por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en las últimas dos décadas. Es decir, al igual que en el caso de Cambiemos, se encuentra una vocación profundamente anti-kirchnerista en LLA; pero a diferencia de Cambiemos, se observa un rechazo al antiperonismo como línea de demarcación política fundamental.

Por otra parte, respecto de los cambios en el organigrama oficial, lo que observamos es que la jerarquización, la relativización o directamente la eliminación de organismos contiene un significado político claro en términos de prioridades políticas. Es decir, es un signo que va más allá de las apelaciones a la austeridad fiscal, o del presunto aumento de la eficacia administrativa, y permite interpretar el sentido del gobierno. Estas decisiones forman parte de lo que el propio presidente denomina la "batalla cultural": correr los límites de lo que el sentido común considera que son responsabilidades indelegables del Estado. El caso más gravitante en este sentido es el del Ministerio de Capital Humano, que reúne áreas fundamentales (Trabajo, Educación, Desarrollo Social y Cultura) y cuyo funcionamiento en estos primeros meses fue sumamente dificultoso, a lo que podemos sumar la reducción a una mínima expresión del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad), la disolución del INADI, organismo encargado de elaborar y proponer políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, y la disolución de la Unidad Especial de Investigación para buscar a los bebés robados y apropiados por la última dictadura militar.

■ ■ ■

La segunda sección de estos informes apunta a un repaso de las principales acciones desplegadas en cada una de las áreas de gobierno. A la hora de analizar las decisiones más importantes que se tomaron, se destacan algunos ministerios. Indudablemente entre ellos sobresale el caso de Economía, a partir de la implementación de una política de ajuste fiscal y monetario que se inició con la devaluación del peso en diciembre y produjo una recesión económica, de hondo impacto en los índices de pobreza y de indigencia. El aumento del desempleo, la caída del poder adquisitivo de los ingresos (especialmente de las jubilaciones y pensiones) y el cierre de empresas signaron estos primeros meses. A su vez, el descenso paulatino de la inflación después del pico de diciembre es el principal activo de esta gestión económica, junto con el superávit financiero obtenido durante los primeros seis meses del año y la "limpieza" del balance del Banco Central. Sin embargo, la tendencia a la acumulación de reservas internacionales con la que se inició el año rápidamente se revirtió y comenzó a





## LA OSCURIDAD AL FINAL DEL TÚNEL

deteriorar el panorama financiero: la brecha cambiaria superó el 50%, el riesgo país se posó por arriba de los 1600 puntos básicos y los acreedores del país comenzaron a poner en duda la capacidad de pago del país. Al cierre de elaboración de estos informes, la incertidumbre generada impactó en las expectativas y generó tensiones económicas que pusieron un manto de duda sobre el devenir del programa económico. Los sucesivos desencuentros con las autoridades del FMI reforzaron la percepción de que, hasta el momento, se puede observar un programa de transición, pero aún no un auténtico programa de estabilización con mayor capacidad de sustentabilidad en el tiempo. También es preciso decir que el programa sintetizado en las consignas electorales de la "dolarización" y el "cierre del BCRA" aún no fue implementado, aunque no pueda descartarse completamente que estos meses hayan sido un prolegómeno de su puesta en práctica.

A su vez, la demorada aprobación de la Ley Bases en el Congreso de la Nación consiguió una serie de transformaciones profundas de las coordinadas de la actividad económica en el país, aún cuando la versión final difiere sustancialmente de la enviada originalmente por el poder ejecutivo: nos referimos fundamentalmente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, a los cambios en materia de regulación de la actividad energética, a la declaración como sujetas a privatización de un listado de empresas y a ciertas modificaciones de la legislación laboral. Junto con ella, la aprobación del Paquete Fiscal también abre un nuevo panorama a partir de la aprobación del blanqueo de capitales, el retorno del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y el achicamiento del Impuesto a los Bienes Personales.

También en materia de política exterior las modificaciones operadas fueron significativas. Verdaderamente se operó un giro de 180 grados en la política exterior de la Argentina, mediante el rechazo del ingreso al BRICS y el abandono de cualquier impulso a la integración regional. Por el contrario, desde el primer momento el presidente Milei encabezó un alineamiento explícito con los intereses de los Estados Unidos y de Israel, que derivó en un apoyo explícito a Ucrania ante la invasión rusa, en un respaldo de carácter "militante" a la acción militar israelí contra Hamas y contra la población civil palestina en la Franja de Gaza y también en un distanciamiento con las autoridades de la República Popular China. El gobierno argentino buscó asociarse en calidad de socio global a la OTAN, así como también a la OCDE. Finalmente, también llevó adelante conflictos diplomáticos con la mayoría de los líderes políticos regionales identificados con el progresismo o las posiciones nacional-populares, como los casos de Lula, López Obrador, Petro e incluso también con el titular del ejecutivo español Pedro Sánchez.



## LA OSCURIDAD AL FINAL DEL TÚNEL

En cuanto a la política social y laboral, por un lado se destaca el aumento en términos reales de la Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar, quizás los únicos paliativos oficiales ante el deterioro de las condiciones de vida de la población. Al mismo tiempo, estas decisiones se combinan con la disminución de la ejecución y/o directamente la paralización de los programas de asistencia a comedores populares, al extremo de haber dado lugar al escándalo de los alimentos en peligro de putrefacción en depósitos oficiales. Vale la pena resaltar que las respectivas denuncias judiciales, impulsadas principalmente por el espacio de Argentina Humana, obtuvieron sistemáticos fallos favorables, sin que el gobierno pudiera encontrar argumentos para defender esta verdadera práctica de inhumanidad, en un contexto de aumento vertiginoso del hambre. En síntesis, respecto de este tema queda establecida una nítida orientación política que prioriza la asistencia individual o familiar por sobre cualquier tipo de organización comunitaria.

Por otra parte, resalta en el área social la desnaturalización del Salario Social Complementario establecido por la ley 27.345 de emergencia social en 2016 que fue una conquista histórica para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, quienes finalmente encontraban en el Estado la posibilidad de un complemento a los ingresos obtenidos mediante trabajos llevados adelante en la informalidad o en actividades mal remuneradas y en condiciones precarias (cartoneros, vendedores ambulantes, textiles, agricultores familiares, cocineras sociocomunitarias, albañiles, etc.). Se eliminó el programa "Potenciar Trabajo", dividido ahora en dos nuevos programas: "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social". Lejos de cualquier fortalecimiento del trabajo, en nombre de terminar con "los intermediarios", el gobierno nacional eliminó el papel que las unidades de gestión del "Potenciar Trabajo" cumplían como certificadoras de la contraprestación laboral que determinaba el cobro del Salario Social Complementario a cada uno de sus titulares. En cambio, se retornó a un criterio asistencialista que pone el acento en la falta de capacitación de los trabajadores de este sector para poder ser absorbidos en el mercado formal. De ahí que se fijó la obligación de realizar cursos de capacitación y se congeló la prestación brindada en el monto de \$78.000, estableciendo a su vez un límite de dos años para el cobro. Nunca está de más seguir insistiendo en el error conceptual de fondo que mantienen estos enfoques, toda vez que el amplio universo de la economía popular no fue absorbido por el empleo formal ni siquiera luego del mayor período de crecimiento económico de la historia argentina reciente, entre 2003 y 2012, y que todos los intentos de política pública orientados a la incorporación de titulares de Programas con transferencias monetarias condicionadas en empleos asalariados han fracasado, alcanzando nulo nivel de impacto.





## LA OSCURIDAD AL FINAL DEL TÚNEL

Con esta decisión quedó de manifiesto el cierre de un ciclo de ocho años (2016-2023) en el que las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular consiguieron avanzar como nunca en la agenda política y en la institucionalidad estatal nacional, al punto de haber podido participar en el diseño y la ejecución de las políticas públicas más relevantes en el área. Para el gobierno que se inicia, en cambio, fueron convertidas en un objetivo a destruir. Tanto en su capacidad de brindar alimentación a través de su amplísima red de comedores como, sobre todo, en su capacidad de organizar laboralmente a millones de trabajadores y trabajadoras informales.

Junto con ello, debemos mencionar que las políticas de integración sociourbana también sufrieron un duro golpe. En 2018 se sancionó la Ley 27453 que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con el objetivo de financiar las obras destinadas a la integración de los barrios populares, que son actualmente más de 6.400. Desde el año 2021 se destinaba un 9% del impuesto PAÍS para financiar este fondo, que se reforzó con un 15% de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas. Una de las primeras medidas del gobierno implicó el vaciamiento del FISU a través del Decreto 193/2024 que redujo la afectación del impuesto PAÍS al FISU a tan sólo el 0,03%. En segundo lugar, se produjo la paralización total del FISU, primero a partir del Decreto 73/2023 que estableció su transferencia al recién creado Ministerio de Infraestructura (que fue rápidamente desmantelado), luego a partir del Decreto 195/2024, trasladando nuevamente la estructura al Ministerio de Economía y finalmente por del Decreto 215/2024 donde se designó al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Legal y Técnica, como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos fiduciarios. Esto implicó una burocratización y traba casi total al funcionamiento del fideicomiso reflejándose en la parálisis de las más de 600 obras en curso. Estas medidas van en sintonía con la intención del ministro de recortar los gastos que se llevan adelante desde su cartera. Por otra parte, en materia de vivienda también podemos mencionar la derogación de la Ley de Alquileres y las modificaciones en el Código Civil y Comercial para liberalizar de forma extrema el mercado, el freno de las obras públicas de vivienda y el lanzamiento de créditos UVA, una medida dirigida a sectores medios y altos.

Por otro lado, resultan particularmente relevantes algunas iniciativas del área de Educación. Nos referimos a la implementación de los célebres “vouchers” educativos, que en los hechos resultaron una política de subsidio a estudiantes de bajos recursos para el pago de las cuotas de la educación de gestión privada en instituciones ya subsidiadas. Se trata de una política



## LA OSCURIDAD AL FINAL DEL TÚNEL

de un alcance relevante: más de 550 mil familias y 716 mil estudiantes, de acuerdo a los datos oficiales. Este programa implica un avance en los procesos de mercantilización de la educación y, particularmente, de transferencia de ingresos del sector estatal al privado. Además, parte de un cambio de lógica respecto al modo de financiamiento de la educación de gestión privada, que ahora pasa a orientarse directamente a la demanda. La otra medida relevante tomada en este área es el lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización, que luego de idas y vueltas finalmente en julio fue sancionado oficialmente a través del decreto 579/24.

Junto con ello, la reducción de partidas presupuestarias educativas fue muy marcada en distintas políticas. Entre ellas se destaca la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), que hasta acá fue una política que atravesó a distintos gobiernos desde su implementación en 1999, producto de la histórica Carpa Blanca docente. Se trata de un mecanismo de compensación en el salario docente a nivel federal, de forma tal de paliar las desigualdades existentes entre las diferentes jurisdicciones. Con su derogación, el presidente Milei repone las condiciones de desigualdad estructural existente luego de la descentralización de la educación ejecutada en los años 90, toda vez que la cesión a las provincias de la responsabilidad de la educación no fue acompañada por los recursos necesarios para su financiamiento. Solo algunas provincias contaron con fondos propios para reemplazar las transferencias nacionales interrumpidas. También en el nivel educativo superior, que sí quedó bajo responsabilidad del Estado nacional, se produjo una importante disminución del presupuesto destinado a las universidades nacionales. Como resultado de la multitudinaria movilización universitaria del 23 de abril, las universidades nacionales consiguieron una ampliación presupuestaria para gastos de funcionamiento, que permitió su continuidad. Sin embargo, el ítem principal del gasto universitario tiene que ver con los salarios del personal, tanto docente como no docente. En este aspecto, la política de recorte del gobierno nacional es sistemática a lo largo de los meses analizados. De igual manera, esta orientación se puede evidenciar en el conjunto del sistema científico-tecnológico, directamente amenazado en su supervivencia.

Respecto de las políticas en Salud, se destaca la desregulación en materia de medicamentos. Esta orientación condujo a la decisión de interrumpir la política de acuerdos de precios con la industria farmacéutica, motivo que disparó los precios de bienes indispensables para el bienestar de gran parte de la población, con un impacto muy alto particularmente entre los adultos mayores. Por otro lado, el desfinanciamiento a los sistemas sanitarios provinciales y la eliminación de una serie de programas llevados adelante por la Nación es el equivalente en el terreno de la Salud a lo ya explicado arriba en materia educativa. Ante las fuertes desigual-



## LA OSCURIDAD AL FINAL DEL TÚNEL

dades territoriales de nuestra geografía, las posibilidades de acceder al derecho a la salud de la población quedan presas de las desigualdades de financiamiento que existen en cada una de las jurisdicciones. Las vías de financiamiento indirectas que llegan a las provincias de parte de Nación representan una forma de compensar parcialmente las desigualdades regionales antes la descentralización ejecutada en los años 90. Por último, resulta relevante por su impacto inmediato mencionar la interrupción en la ejecución de programas que permiten la costosa atención de enfermedades poco frecuentes. Si bien su impacto es acotado en términos absolutos, da lugar al fallecimiento de pacientes que, por decisión administrativa, son virtualmente condenados a muerte.

Finalmente, la política de Seguridad se caracterizó por una serie de medidas muy agresivas que tienden a asociar la idea de “orden” con el control del espacio público, y el enfrentamiento con las organizaciones gremiales y sociales, en línea con la búsqueda de dar una imagen de “mano dura” y “antipiquetes”. Este giro represivo, llevado adelante por la ministra Bullrich, encuentra un antecedente en su gestión durante la presidencia de Macri, pero ahora se profundiza. Pero las políticas de Seguridad del gobierno representan una verdadera amenaza para amplios sectores sociales, mucho más allá de quienes ejercen su derecho a la protesta. Para el público en general, al quedar sujetos a un mayor arbitrio policial (al mismo tiempo que se eliminan herramientas de acceso a la justicia como los CAJ); también al proponerse programas neutralizantes como centro de la política de prevención del delito, desatendiendo otro tipo de estrategias que pueden tener un mayor impacto en materia securitaria en el territorio; al promoverse acciones más violentas ante la comisión de delitos; y al ver un avance sobre los derechos individuales, particularmente el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales. Además, se constituye una deriva hacia el derecho penal de autor que amenaza a la población en general, especialmente de sectores populares estigmatizados.

■ ■ ■

La tercera sección de cada uno de los informes temáticos apunta a realizar un breve análisis de cuáles fueron los rasgos principales de la ejecución presupuestaria. Este aspecto, no siempre tenido en cuenta, es fundamental para evaluar el paso de las palabras a los hechos. En los cuadros de asignación presupuestaria (con más razón en un año donde se prorrogó el presupuesto nacional de 2023 con los niveles inflacionarios existentes) y, sobre todo, de ejecución del crédito asignado, se concretan las prioridades de cualquier gestión pública.





## LA OSCURIDAD AL FINAL DEL TÚNEL

Concluimos esta presentación general invitando a los lectores y lectoras a recorrer cada uno de los informes sectoriales, a profundizar en sus áreas de interés y, de esa manera, poder construir una imagen integral de los primeros meses de un gobierno de características inéditas. Es necesario comprender de la manera más precisa posible lo que está sucediendo, como premisa del despliegue de una acción de resistencia y, tan pronto como sea posible, de la construcción de una alternativa capaz de poner en el centro de la política a los seres humanos, sin exclusiones, reafirmando el derecho del conjunto de nuestra comunidad nacional a una vida digna.

*Coordinación ejecutiva de la Fundación DHI - Agosto de 2024*



Fundación  
para el  
Desarrollo  
Humano  
Integral

La oscuridad al final del túnel  
Un balance político y de gestión sobre los  
primeros meses del gobierno de Javier Milei  
Agosto 2024

[www.fundaciondhi.com.ar](http://www.fundaciondhi.com.ar)

@fundacion.dhi